



acceso 360



08/10/2020

Resumen de prensa del IEF

Instituto de la  Empresa Familiar

REBOLD

EMPRESA FAMILIAR

Fecha	Titular/Medio	Pág.	Docs.
08/10/20	DEMANA PACTES PER A L'ARRIBADA DELS AJUTS / Diari de Girona	5	1
08/10/20	UN PREMIO A LA «PERMANENTE INNOVACIÓN» / El Comercio	6	1
08/10/20	EL HOMENAJE A CAFENTO ENSALZA LOS VALORES DE LA EMPRESA FAMILIAR, "VERTEBRAL" EN ASTURIAS / La Nueva España	7	1
08/10/20	LA ASOCIACIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR ABORDA EL CAMBIO DE MENTALIDAD QUE REQUIERE LA DIGITALIZACIÓN / El Correo Gallego	8	1

ECONOMÍA

Fecha	Titular/Medio	Pág.	Docs.
08/10/20	EL DÉFICIT DE LAS PENSIONES SE DISPARA Y YA ROZA LOS 27.000 MILLONES / Abc	10	2
08/10/20	ESCRIVÁ DA POR HECHO QUE MONTERO ASUMIRÁ PARTE DE LOS GASTOS AJENOS AL SISTEMA ESTE AÑO / Abc	12	2
08/10/20	SÁNCHEZ ANUNCIA LA MOVILIZACIÓN DE 72.000 MILLONES EN TRES AÑOS PARA CREAR 800.000 EMPLEOS / Cinco Días	14	2
08/10/20	LOS AGENTES SOCIALES PIDEN PARTICIPAR EN EL REPARTO / Cinco Días	16	1
08/10/20	EL SUPREMO IMPIDE A HACIENDA REGISTRAR HOGARES O EMPRESAS "PARA VER QUÉ SE ENCUENTRA" / Cinco Días	17	1
08/10/20	SÁNCHEZ CONCENTRA 72.000 MILLONES DE LA UE EN 3 AÑOS PARA SALVAR SU MANDATO / El Economista	18	1
08/10/20	LA MITAD DE EMPLEO QUE AL LLEGAR A MONCLOA / El Mundo	19	1
08/10/20	ATENCIÓN EN CASA A MAYORES PARA CREAR EMPLEO PÚBLICO / El Mundo	20	1
08/10/20	26.000 MILLONES DE INVERSIÓN PARA LA TRANSICIÓN 'VERDE' / El Mundo	21	1
08/10/20	EL TERCIO DIGITAL: 5G Y CONEXIONES HASTA 19.600 MILLONES / El Mundo	22	1
08/10/20	SÁNCHEZ PROMETE 800.000 EMPLEOS EN TRES AÑOS CON LOS FONDOS EUROPEOS / El País	23	2

ECONOMÍA

Fecha	Titular/Medio	Pág.	Docs.
08/10/20	LA 'TASA TOBIN' Y EL IMPUESTO DIGITAL ENTRARÁN EN VIGOR DENTRO DE TRES MESES / El País	25	1
08/10/20	ADIF PIDE DISPENSA A BRUSELAS PARA NO AFLORAR 16.000 MILLONES DE DEUDA / Expansión	26	1
08/10/20	SÁNCHEZ MOVILIZARÁ 72.000 MILLONES EN TRES AÑOS Y PROMETE CREAR 800.000 EMPLEOS / Expansión	27	2
08/10/20	EL GOBIERNO REDUCIRÁ LOS CONTROLES PARA AGILIZAR EL REPARTO DE LOS FONDOS / Expansión	29	1
08/10/20	LA UE LANZARÁ BONOS SOCIALES PARA FINANCIAR EL FONDO DE DESEMPLEO / Expansión	30	1



acceso 360

EMPRESA FAMILIAR





EMPRESA FAMILIAR

Demana pactes per a l'arribada dels ajuts

■ El president de l'Associació Catalana de l'Empresa Familiar (Ascef), Amadeu Jori, va reclamar un acord polític i consens perquè els fons de la UE destinats a la recuperació econòmica arribin ràpid. La Ascef va fer públic un sondeig segons el qual el 85% de les empreses catalanes familiars veuen difícil que els fons europeus per a la recuperació arribin ràpid, principalment per la falta d'acord entre els polítics. **EFE** BARCELONA



Alfredo Canteli, Carlos Manuel Rodríguez, Sara Peláez, Pilar Rodríguez y Jorge Suárez, en la entrega del premio en el Auditorio de Oviedo. A. PIÑA

Un premio a la «permanente innovación»

La familia Rodríguez Peláez, propietaria de Cafento, recibió el galardón que concede la Asociación asturiana de empresa familiar

P. ALONSO

OVIEDO. Factura 100 millones de euros, tiene fábricas en Tineo, Bilbao y Dublín y emplea a 500 trabajadores. Pero, sobre todo, en Cafento son una familia. Y como tal ayer recibieron el premio que concede la Asociación Asturiana de Empresa Familiar (Aefas), que en su XI edición ha querido reconocer a la familia Rodríguez Peláez por su «permanente innovación y excelencia en el desarrollo del negocio durante los últimos 90 años, por su exitoso proceso de expansión y por su vinculación con sus raíces en Tineo, proyectándose como un motor

de la economía local y regional».

«Pocos premios nos hacen sentir tanto orgullo como este», reconoció el consejero delegado de Cafento, Carlos Manuel Rodríguez, tras recibir el galardón en un acto al que acudió acompañado de su madre, Sara Peláez, y de una de sus dos hermanas, Pilar Rodríguez. «Los tres nos sentimos orgullosos del trabajo que nuestros padres y fundadores, Juan Carlos y Sara, desarrollaron y también de haber podido recoger su legado». Orgullo y también responsabilidad son palabras en las que Carlos Manuel Rodríguez hizo hincapié porque «son valores que la empresa familiar tiene muy presentes», señaló. Asimismo, destacó la fortaleza de este tipo de empresa y más en época de crisis. «Estamos más preparados porque no pensamos en el año siguiente, sino en la empresa que queremos dejar a nuestro hijos».

Del valor y de la riqueza que aportan estas empresas, que en España representan el 90% del tejido, también habló el consejero de Industria de Principado, Enrique Fernández. «La empresa familiar vertebró la economía y la sociedad asturiana», manifestó Fernández, quien hizo extensivo el reconocimiento a la familia Rodríguez Peláez al «conjunto de la empresa que día a día lucha por mantener y generar actividad, economía y empleo en la región». En nombre del Gobierno les agradeció y mostró su apoyo, haciéndose cargo también de sus reivindicaciones, como las que

pasan por aligerar los trámites burocráticos. El Gobierno se «ha hecho eco y estamos en un proceso de revisión profunda para hacer la administración lo más eficiente, rápida y más digital», apuntó en este sentido.

Motor económico

Durante su intervención, el presidente de Aefas, Jorge Suárez, incidió también en la importancia de la empresa familiar como motor económico y de empleo. Y también como impulsora de proyectos con los que poder captar los fondos europeos. «El reparto dependerá en una parte muy importante de las empresas familiares y de sus proyectos», aseguró Suárez, que valoró a Cafento como uno de los «puntales» y de los mejores ejemplos del buen hacer de la economía asturiana y les animó a seguir siendo «un referente» para todas las empresas de la región.

«La empresa familiar vertebró la economía y la sociedad asturiana», destacó el consejero de Industria del Principado



Pr: Diaria
Tirada: 36.471
Dif: 31.364

Secc: ECONOMÍA Valor: 4.482,94 € Area (cm2): 440,8 Ocupac: 48,02 % Doc: 1/1 Autor: Oviedo, L. G. Los orígenes del grupo Caf Num. Lec: 308000



Por la izquierda, el consejero Enrique Fernández, Paula Rodríguez, de Cafento, y su madre, Sara Peláez; el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; Carlos Manuel Rodríguez, primer ejecutivo de Cafento; Marcelino Marcos, presidente de la Junta; Pablo Junceda, director general del Sabadell-Herrero; Jorge Suárez, presidente de Aefas; Julio González Zapico, director general de Comercio, y Eva Pando, directora general del Idepa. | Carolina Díaz

El homenaje a Cafento ensalza los valores de la empresa familiar, "vertebral" en Asturias

"No pensamos solo en el año siguiente, sino en lo que vamos a dejar a nuestros hijos", destaca la familia Rodríguez al recoger el premio Aefas

Oviedo, L. G.

Los orígenes del grupo Cafento se remontan a la iniciativa de uno de los abuelos de Carlos Manuel, Paula y Pilar Rodríguez, quienes ahora pilotan una compañía dedicada a fabrica café y a otros negocios alimentarios que ocupa a 500 personas y que mantiene su corazón fabril en Tineo, donde el pionero de la estirpe abrió una tienda que antaño se conocía como "la del gallego". Carlos Manuel Rodríguez, consejero delegado de Cafento, evocó ayer esos antecedentes de la compañía al recoger el premio de la Asociación Empresa Familiar de Asturias, distinción que reconoce a corporaciones de propiedad familiar que brillan por su longevidad, su capacidad de innovación y sus valores.

El acto de entrega del galardón, celebrado en el Auditorio de Oviedo bajo rigurosas medidas de seguridad sanitaria, homenajeó a los impulsores de Cafento, aunque en cierta medida también supuso un reconocimiento a las demás familias empresarias que están detrás de la mayor parte del tejido productivo de la región. "Las empresas familiares son las que vertebran la economía asturiana", subrayó Enrique Fernández, consejero de Industria y Empleo del Principado.

En el contexto de la crisis asociada a la pandemia del covid-19, Carlos Manuel Rodríguez quiso subrayar, a preguntas de este diario, la forma singular, distinta a la de las sociedades cotizadas, en que las empresas familiares suelen afrontar episodios como el presente. "No pensamos sólo en el año siguiente, sino a largo plazo; pensamos en qué empresa vamos a dejar a nuestros hijos", dijo el consejero delegado de Cafento.

La compañía ha protagonizado en el último año y medio dos operaciones corporativas. En octubre de 2019 adquirió la firma vasca Iparcoffee, propietaria de las marcas El Abra, Conti o Apassionate, y con 60 puestos de trabajo. Unos meses antes, Cafento adquirió una participación mayoritaria en el grupo irlandés Java Republic, productor de café y té de alta calidad. La operación supuso un desembolso que se ha estimado en 30 millones de euros. Carlos Manuel Ro-

dríguez explicó también que la compañía ha culminado recientemente la construcción de la nueva fábrica de Mantequera de Tineo, que produce mantequilla de alta gama con sus marcas Imperial y Lorenzana. Cafento ha programado una inversión adicional de 1,4 millones para fabricar nuevas elaboraciones.

Las principales instituciones asturianas se adhirieron al homenaje a la familia Rodríguez. Además del consejero de Industria, Enrique Fernández, acudieron al acto el presidente de la Junta General del Principado, Marcelino Marcos Lfndez, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, así como varios directores generales del Principado.

El jurado del premio, presidido por Jorge Suárez, a su vez presidente de Aefas, ha destacado de Cafento "su permanente innovación y excelencia en el desarrollo del negocio del café durante los últimos 90 años", su "exitoso proceso de expansión nacional e internacional" y, de manera singular, "su fuerte vinculación con sus raíces en Tineo, proyectándose como un motor de la economía local y regional".

Cafento inauguró hace doce años en La Curiscada (Tineo) una de las fábricas de café con mayor dimensión de Europa. Allí tiene centralizada la producción de sus marcas globales Montecelío y Stracto y regionales (El Gallego y Areces, entre ellas). La planta tiene 125 trabajadores, muchos de ellos de la zona, destacó Carlos Manuel Rodríguez. Y respondió también sobre ese apego de Cafento a su concejo de origen: "Los de Tineo somos de Tineo".



La Asociación de la Empresa Familiar aborda el cambio de mentalidad que requiere la digitalización

SANTIAGO. Una de las principales debilidades de España es la capacitación digital, además de la inversión en innovación tanto pública como privada. Así se expresó ayer Carina Szpilka, *general partner* de K Fund, presidenta de Adigital y consejera independiente de Abanca, en

el transcurso de la *webinar* organizada por el Club de Consejeras de la Asociación Gallega de la Empresa Familiar, AGEF, enmarcada en el ciclo de conferencias "Martes de Consejos", que en esta ocasión se ha centrado en la situación de la digitalización, y la capacidad digital,

especialmente tras la pandemia, que cree que "se ha gestionado con herramientas del siglo XX y no del XXI".

Szpilka, además de recalcar que la digitalización "no es solo una cuestión de tecnología y de máquinas, sino de realizar un cambio de mentalidad para incorporar-

la a nuestras vidas", incidió en el concepto de resiliencia de las empresas. Señaló que estas son las que están "preparadas para sobrevivir y transitar en las incertidumbres" y que las empresas están "obligadas a incorporar la resiliencia a sus modelos de negocio". **REDACCIÓN**



Carina Szpilka.



acceso 360

ECONOMÍA





La pandemia desploma los ingresos

El déficit de las pensiones se dispara y ya roza los 27.000 millones

► El desequilibrio suponía a final del segundo semestre el 2,37% del PIB, por encima del objetivo de Escriba para todo el año

SUSANA ALCELAY
MADRID

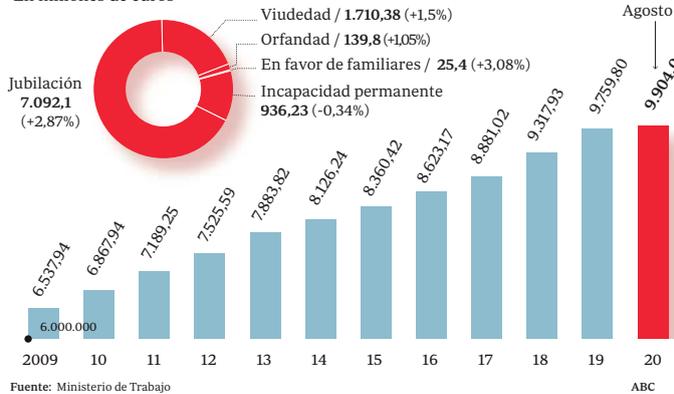
La Seguridad Social está contra las cuerdas. El desplome de la economía y la destrucción de empleo por la pandemia está golpeando las ya maltrechas cuentas de la Seguridad Social, que ve cómo se agrandan los números rojos que arrastra desde 2011 y que al final del segundo semestre se situaban ya en 26.600 millones. Esta cantidad supone el 2,37% del PIB, más que el objetivo que se ha fijado el ministro de Seguridad Social para todo el año, del 2%.

El desfase es consecuencia de que los desembolsos siguen creciendo en un escenario de brusca caída de los ingresos, lo que ha provocado que el sistema esté endeudado en 100.000 millones. La ejecución presupuestaria del primer semestre refleja que la recaudación por cotizaciones, el pulmón con el que se pagan las pensiones, se desplomó en el primer semestre un 3,8% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que los gastos crecieron un 3%. Así se recoge en el trabajo «Pensiones públicas más allá de la Covid-19» elaborado por los economistas Enrique Devesa y Rafael Doménech para BBVA Research en la que reclaman al Pacto de Toledo soluciones con urgencia.

Aseguran ambos economistas que «esta crisis no hace más que intensificar y anticipar en el tiempo el desequi-

Gasto mensual en pensiones

En millones de euros



Fuente: Ministerio de Trabajo

Evolución de la tasa de dependencia

En porcentaje de población



Fuente: Eurostat, AIReF

librio subyacente del sistema de pensiones como consecuencia del aumento de la esperanza de vida, de la jubilación de la generación del "baby boom" en los próximos años, y de que las nue-

vas pensiones entran en el sistema con un desequilibrio actuarial». Los actuarios sitúan este desfase en el 51% de media y el Banco de España calcula que, con datos de 2017, las nuevas pensiones recibirían 1,74 euros de prestación por cada euro de cotización.

Dicen ambos economistas, dos de los expertos que asesoraron al Gobierno de Rajoy para la reforma de las pensiones en 2013, que aunque existe bastante incertidumbre en las proyecciones de población, todas apuntan a que la tasa de dependencia, definida como la población de 66 años o más sobre la población en edad de trabajar, se duplicará en las próximas décadas. Alertan de que en ausencia de mecanismos correctores por el lado del gasto o de los ingresos, el déficit del sistema irá creciendo paulatinamente como consecuencia del incremento de la relación entre pensionistas y cotizantes.

Problema de sostenibilidad

Devesa y Doménech advierten de que este desequilibrio genera un problema de sostenibilidad, que a su vez da lugar a incertidumbres y a una preocupación en la sociedad sobre el futuro de las pensiones, a lo que suman las deficiencias en el diseño actual, que hace que las cotizaciones, que son más elevadas que en la media de la UE, sean vistas como un impuesto más y no como un salario diferido. Esta situación «genera importantes efectos distorsionadores con consecuencias negativas sobre los costes salariales, el empleo y la inversión de las empresas», puntualizan.

Explican que, a diferencia de lo que ocurre en países como Países Bajos o Suecia, la información que reciben los trabajadores a lo largo de su carrera laboral sobre la correspondencia entre lo cotizado y su futura pensión es claramente insuficiente en España. A ello

Números rojos
Los gastos están creciendo a un ritmo del 3%, pero la recaudación por cotizaciones cae un 4%



añaden «los problemas de contributividad y falta de equidad, de manera que las personas que han cotizado más a lo largo de su carrera laboral pueden recibir pensiones iguales o incluso menores que otras que han cotizado menos».

Por todo ello proponen al Pacto de Toledo un giro en la definición del sistema de reparto. Abogan por implantar cuentas nocionales individuales como «la mejor estrategia para asegurar la sostenibilidad, elevar la contributividad, la equidad, la transparencia, la suficiencia y la eficiencia, eliminar las incertidumbres, incentivar el retraso en la edad de jubilación, aumentar la probabilidad de empleo de los jóvenes y reducir las distorsiones sobre el sistema productivo». Creen que tomar esta decisión tendría efectos positivos sobre la productividad, el empleo, la innovación y el crecimiento, «lo que a largo plazo –afirman– termina dando lugar también a pensiones medias más elevadas y a un aumento del bienestar social».

Los dos economistas defienden que la transición al nuevo sistema sea gradual para que los futuros pensionistas tengan tiempo para ir viendo cómo las proyecciones de su pensión inicial cambian, puedan anticiparse y adoptar decisiones para contrarrestar los cambios en función de sus expectativas.

Cuentas nocionales

¿Pero en qué consisten las cuentas nocionales? Con esta fórmula los cotizantes en activo pagarían las pensiones de los jubilados del momento, como ahora. Sin embargo, en lugar de que el dinero de las cuotas fuera a una caja común, iría a cuentas individuales, de forma solo contable. Así, cada trabajador iría acumulando las cotizaciones de toda su vida laboral en su propia cuenta virtual y a esas aportaciones se le sumaría el rendimiento neto de ese dinero acumulado. Toda esa suma conformaría el denominado capital nocional.

En el momento de la jubilación, a esa cantidad acumulada se le aplicaría un factor de conversión, que transformaría ese dinero en una renta vitalicia. Dicho factor consistiría en aplicar la media de años que va a vivir el jubilado, según la esperanza de vida en ese momento, y cómo se revalorizará su pensión anualmente.



UNA PARTIDA DE 18.000 MILLONES

Escrivá da por hecho que Montero asumirá parte de los gastos ajenos al sistema este año

MARÍA CUESTA MADRID

La reforma de las pensiones tiene la llave para desbloquear los fondos europeos con los que afrontar la crisis del coronavirus. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, confirmó ayer que esta reforma será una de las claves del documento que el Gobierno

presentará a Bruselas ya que es una de las «recomendaciones específicas» que nos ha hecho la Unión Europea. «Tenemos que explicar qué vamos a hacer con las pensiones, es una de las reformas estructurales que se han identificado», dijo ayer en el Congreso. Según Escrivá, el Gobier-

no cuenta con un «plan bastante avanzado» y será incluido dentro de este plan de reformas. Sin embargo, la difícil geometría parlamentaria actual hace que un acuerdo del Pacto de Toledo sea una suerte de salvoconducto para la reforma, por lo que el ministro animó ayer a la comisión parlamentaria a cerrar un acuerdo sobre estas recomendaciones. «No hay mejor momento que este para cerrar el consenso en torno a las pensiones», reivindicó.

El ministro avanzó además que espera traspasar a los Presupuestos Generales del Estado unos 18.000 millo-

nes –que se han identificado como gastos que deben ser abonados con las cotizaciones sociales– en 2023 y se hará de forma escalonada, con una primera factura que se incluirá en las próximas cuentas en las que ya trabaja el Gobierno. De hecho, en el techo de gasto presentado el martes «hay una provisión significativa para que en el Presupuesto de 2021 se materialice un importante

ajuste». «Daremos un primer paso una vez nos lo recomiende el Parlamento, pero preventivamente el techo de gasto ha dejado espacio sufi-



J. L. ESCRIVÁ



cienta para que eso sea así». Se trata, dijo, de «ordenar en esta legislatura todo el sistema de ingresos y gastos».

Así, el déficit del sistema se disparará desde el 1,3% al 2% por el efecto de la pandemia aunque los cálculos del ministerio pasan por que este desfase se haya reconducido al final de la legislatura, en 2023, tanto por el efecto de la mejoría económica como por el traspaso de los gastos impropios. Más allá de lograr el equilibrio presupuestario, Escrivá señaló el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas como el otro gran objetivo.



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía

Sánchez anuncia la movilización de 72.000 millones en tres años para crear 800.000 empleos

Usará las todas las subvenciones de la UE, pero esperará a 2023 para ver si pide los créditos

El 70% de fondos irá a digitalización y transición verde

JUANDE PORTILLO
MADRID

“Estamos todavía en plena pandemia, pero el mundo ha cambiado y debemos acelerar la transformación del país si queremos ganar nuestro futuro”, aseveró ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, agregando que “no se trata solo de recuperar el PIB que nos arrebató la pandemia, se trata de crecer de una nueva manera”, una “más fuerte y justa, más competitiva, pero también más sostenible”. A tal fin, en un acto desde La Moncloa con la presencia telemática del resto de su Gabinete, representantes de patronal, sindicatos y embajadores europeos, Sánchez presentó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, que definió como “la hoja de ruta de esa nueva modernización de nuestro país para los próximos seis años”. Una estrategia con la que el Ejecutivo aspira a captar las ayudas europeas y canalizarlas de inmediato en inversiones. El objetivo de partida, anunció, es movilizar 72.000 millones de euros entre 2021 y 2023 para elevar el crecimiento potencial del PIB en 2,5 puntos y crear 800.000 puestos de trabajo en esos tres años.

Aunque España aspira a obtener un total de 140.000 millones de euros en fondos europeos en seis años, Sánchez solo hizo mención a la

mitad que tendrá forma de subvenciones porque el Ejecutivo esperará a mediados de 2023, el plazo límite que hay, para decidir qué solicita de los otros 70.000 millones en créditos de la UE.

Para empezar, el Ejecutivo anticipará los 27.400 millones que espera recibir ya en 2021 vía deuda para que estén disponibles desde la entrada en vigor del nuevo Presupuesto. El objetivo es ejecutar íntegramente inversiones por valor de esos 72.000 millones en tres años (el 70% en dos años) a fin de que el PIB, que caerá un 11,2% este año según sus cálculos, no solo rebote un 7,2% el año que viene, sino que crezca un 9,8%.

Sánchez anticipó que el 37% de los fondos se destinarán a la “inversión verde, vinculada con la transición ecológica”, y que otro 33% irá destinado a la transformación digital del país, tal y como exige la UE, “para crear cientos de miles de puestos de trabajo, miles de empresas”, ayudar a las pequeñas a convertirse en medianas, reindustrializar el país o avanzar en la lucha contra el cambio climático y la desigualdad social.

La puesta en marcha de estos proyectos, sostuvo, pasa por aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, para los que el Gobierno ha ampliado el techo de gasto un 53%, hasta los 196.000 millones de euros, comprometidos con la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de oportunidades y la cohesión social.

El plan se despliega en torno a cuatro pilares. Uno medioambiental, que pasa por impulsar 250.000 vehículos eléctricos para 2023, a fin de alcanzar cinco millones en 2030; habilitar 100.000 puntos de recarga para ellos; rehabilitar más de medio millón de viviendas

Reparto de fondos del plan de recuperación

En millones de euros y % del total

Por políticas troncales



Fuente: La Moncloa y elaboración propia

Por objetivos



BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE

en tres años o invertir 2.000 millones en restaurar 3.000 kilómetros de ríos. Otro digital, que busca modernizar la educación y las empresas, dar formación digital al 80% de españoles; que el 75% tenga acceso a cobertura 5G y que toda la población tenga internet rápido. El tercero es el de igualdad, que busca acabar con la brecha de género y facilitar 65.000 plazas de educación infantil de 0 a 3 años. Y un cuarto de igualdad de oportunidades que creará 200.000 nuevas plazas de formación profesional

Se invertirá en FP, coches eléctricos, redes 5G, vivienda, industrialización o escuela infantil

El Gobierno simplificará por decreto la ley de contratación pública

en cuatro años, reforzarán la sanidad, la educación, la atención a dependientes, las políticas activas de empleo y la atención a la España rural. En paralelo, el Gobierno impulsará un “sistema fiscal justo” en los próximos años.

A su vez, las inversiones se articularán en torno a 10 políticas estructurales en cuyo reparto (ver despiece) será la pata educativa la que más fondos reciba.

En todo caso, uno de los principales problemas que presenta el plan es el bajo grado de ejecución de fondos europeos que logra España, que en el último presupuesto plurianual comunitario fue de solo el 34%, según la fundación de cajas de ahorros, Funcas.

Para eliminar todas las “trabas administrativas” y “cuellos de botella”, Sánchez anunció que simplificará vía decreto la legislación que rige los contratos y subvenciones públicos, para garantizar una ejecución “impeccable” y “ágil”. En paralelo, desplegará un mecanismo de supervisión y rendición de cuentas. Sánchez creará una comisión interministerial, presidida por él, y una

unidad de seguimiento de las inversiones en Moncloa; reactivará la Conferencia Sectorial de Fondos Europeos con las Comunidades Autónomas; reforzará la Conferencia de Presidentes Autonómicos, implicando a las entidades locales; fomentará la interlocución del plan con patronal o sindicatos, y se dará un parte recurrente a Congreso y Senado.

“Nunca, al menos desde los tiempos de la Transición, nuestro país ha necesitado tanto la unidad, la cooperación de las fuerzas parlamentarias”, terminó reivindicando el presidente del Gobierno, aseverando que este es “el mayor reto al que se ha enfrentado nuestra generación desde el restablecimiento de la democracia”. “El plan que hoy presentamos, los Presupuestos Generales que lo activan, ofrece una oportunidad única para demostrar el ímpetu de nuestro país, la buena política, los acuerdos y soluciones”, aseveró, pidiendo a gobernantes y fuerzas políticas “unidad”, sin adhesiones ciegas, pero con críticas que sean constructivas, reivindicó.



Así será el reparto de las ayudas

► **Educación, a la cabeza.** El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que de los 72.000 millones de euros que aspira a movilizar entre 2021 y 2023, a cuenta de las ayudas europeas, en el marco del plan de recuperación, el 37% se destinará a la transición medioambiental (unos 26.600 millones) y otro 33% (unos 23.700 millones) será para la digitalización. Se trata, sin embargo, de dos ejes transversales que afectan a múltiples campos. Así, atendiendo a las 10 políticas troncales anunciadas, la de "educación, formación profesional y el conocimiento" será la que más reciba, un 18% del total (12.960 millones). A su vez, la "agenda urbana, de agricultura y lucha contra la despoblación", recibirá el 16% de fondos (11.500 millones); la de "infraestructuras y resiliencia ecológica", el 12% (8.640 millones); la de "transición energética justa", el 9% (6.480 millones); la consecución de una "Administración pública para el siglo XXI", un 5% (3.600 millones); la "modernización y digitalización de la economía y las pymes", un 17% (12.240 millones); el "pacto por la ciencia, la innovación y las capacidades del sistema nacional de salud", otro 17%; "la nueva economía de los cuidados y las políticas de empleo", un 6% (4.320 millones); y "el deporte y la industria cultural", un 1,1% (792 millones). La décima y última de las políticas estructurales del plan es la "modernización del sistema fiscal", una reforma tributaria para elevar los ingresos públicos una vez superada la crisis que debería aportar fondos en lugar de requerirlos.

Impacto sobre la economía

Calviño ve "esencial" el plan para recuperar los niveles de PIB precrisis a finales de 2022

Cree que el ritmo de crecimiento anterior se alcanzará en 2023

Promoverá planes de digitalización a tres años por 20.000 millones

J. PORTILLO
MADRID

"El plan que se presenta es una oportunidad extraordinaria para abordar la crisis económica y la transformación" del país, defendió ayer la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española. "Se trata de un plan absolutamente esencial para que nuestro país recupere el nivel de PIB previo a la llegada de la pandemia a finales de 2022 y volvamos a la senda de crecimiento pre-Covid a finales de 2023, incorporando así la creación de más de 800.000 puestos de trabajo", aseveró durante su intervención, junto al resto de los vicepresidentes del Gobierno, en La Moncloa, horas después de la presentación realizada por el presidente del Ejecutivo.

El objetivo, detalló, es "movilizar la inversión privada, la innovación, poner en marcha un plan que nos permita crecer entre dos y tres puntos porcentuales" adicionales en los próximos tres años y conseguir que la economía logre un crecimiento potencial superior al 2% a largo plazo. De hecho,



La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española. EFE

sus previsiones son que el PIB pase de caer un 11,2% este año a subir un 7,2% el que viene, por inercia, o hasta un 9,8% gracias al plan presentado.

Dentro del área de digitalización, que liderará como parte de su ministerio, Calviño subrayó que España cuenta ya con algunas fortalezas, como son una amplia red de telecomunicaciones o un importante atractivo para convertirse en la base operativa de teletrabajo. Entre las carencias, sin embargo, Calviño destacó la baja formación digital de su personal.

Para paliarlo, el plan de recuperación del Ejecutivo recoge la inversión en el ámbito digital de 20.000 millones de euros en tres años, un tercio de la inversión pública prevista con las transferencias comunitarias para el periodo 2021 a 2023, concretó.

La hoja de ruta del Gobierno, resaltó, incluye una

decena de objetivos. Destaca los de garantizar una conectividad digital adecuada al 100% de la población (con más de 100 Mbps); impulsar la tecnología 5G; dar formación digital al 80% de los ciudadanos; impulsar la digitalización de las Administraciones públicas, con especial ahínco en empleo o justicia; reforzar la ciberseguridad; digitalizar 2,5 millones de pymes, impulsando el emprendimiento y las startups; apoyar sectores clave como el comercio o la energía; mejorar el tránsito a una economía del dato, y garantizar los derechos en el nuevo entorno digital, en particular los de los consumidores.

Un objetivo transversal a todos, matizó, es que la digitalización contribuya de forma importante a cerrar brechas territoriales, sociales y de género.

El plan presentado ayer incorpora importantes reformas estructurales, pues en paralelo al programa de inversiones, se verá acompañado de relevantes cambios legislativos. Es el caso, ilustró, de la ley de educación, la de startups, la de modernización de la Administración pública y de las políticas activas de

La vicepresidenta económica admite que la estrategia tiene riesgos pues disparará la deuda

Prevé facilitar formación en nuevas tecnologías al 80% de la población

empleo, así como la reciente norma que regula el teletrabajo. Cambios importantes, sostuvo, para facilitar, entre otras cosas, que España cuente con un clima atractivo para el emprendimiento.

"Un proyecto de esta ambición y complejidad debe desplegarse contando con la colaboración de todos", solicitó Calviño, aseverando que es "un proyecto de país". La digitalización, expuso, es imparable y España tiene una oportunidad de "situarse a la vanguardia de esta nueva realidad".

"Estamos hablando de tomar ahora las decisiones correctas para encauzar el futuro", dijo la vicepresidenta económica, admitiendo que el plan "exige un aumento de la deuda pública que podría ser un lastre para las generaciones futuras si no se invierte adecuadamente en la modernización del tejido productivo y en un nuevo contrato social".



Futuras medidas

Los agentes sociales piden participar en el reparto

Los sindicatos solicitan mejoras en los servicios públicos y en la legislación laboral

La Cámara de Comercio reclama consenso político

CINCO DÍAS
MADRID

Es difícil no estar de acuerdo con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, presentado ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para movilizar 72.000 millones de euros provenientes de ayudas comunitarias en los próximos tres años y con los que pretenden generar 800.000 empleos en sectores digitales y de economía verde. Así opinaba ayer el secretario general del sindicato CC OO, Unai Sordo, si bien hecha esta valoración, demandó al Ejecutivo una mayor concreción en las medidas. Y, sobre todo, reclamó la cogobernanza de esos recursos mediante el impulso del papel del diálogo social y de los agentes sociales (patrón y sindicatos).

En esta misma línea, desde UGT exigieron también al Gobierno que todo el plan presentado por Sánchez pase por el diálogo social. Además consideraron que el objetivo de crear 800.000 empleos con estos recursos es "realista, e incluso escaso" si se tiene en cuenta el volumen de inversiones y los empleos destruidos durante la pandemia. Pero al margen de esta valoración, en este sindicato consideró el plan "un buen camino para acometer la modernización de nuestro país". Aunque reclamó incidir en dos aspectos: comenzar a derogar la reforma laboral del PP para modernizar la legislación del mercado de trabajo; y, en segundo lugar, que parte de los recursos vayan a fortalecer los servicios públicos (edu-



El líder de CEOE, Antonio Garamendi, junto a Unai Sordo (CC OO) y Pepe Álvarez (UGT). EFE

cación, sanidad, atención a la dependencia) "que han evidenciado mayores debilidades durante la pandemia".

Precisamente, desde el sindicato de funcionarios CSIF reclamaron también que los 800.000 nuevos empleos en tres años vayan destinados al refuerzo de los servicios públicos.

De forma algo más fría recibían ayer este plan en la organización empresarial CEOE, donde, pese a ello, también reclamaron su papel en la cogobernanza de estos fondos. La patro-

nal rehusó ayer valorar el plan de reconstrucción y se limitó a afirmar que continuará su colaboración en la reconstrucción económica y social de España, a través de su oficina técnica de apoyo para los proyectos europeos y la plataforma www.ceoexeuropa.es, dijeron a Efe fuentes empresariales. Con estas iniciativas CEOE quiere dar forma a 15 proyectos económicos sobre la transición ecológica y la digitalización para generar un efecto arrastre, en especial entre las pymes.

Mientras, la Cámara de Comercio de España consideró positivas las líneas del proyecto pero pidió diálogo y consenso político para aprovechar "la segunda gran modernización de la economía española". Sin embargo, a tenor de la reacción del principal partido de la oposición este consenso político no se vislumbra en el horizonte. El líder del PP, Pablo Casado, receló del reparto de los fondos que vaya a hacer el Gobierno e insistió en la necesidad crear un organismo independiente que gestione los recursos europeos.

La patronal, sin valorar el plan, dice que colaborará con sus propias iniciativas

El PP exige un organismo independiente que gestione los fondos europeos



Tribunales

El Supremo impide a Hacienda registrar hogares o empresas “para ver qué se encuentra”

El fisco usaba el argumento de que el dueño tributaba por debajo de la media de su sector

Desde 2019 la Agencia Tributaria alertaba a las pymes

J. PORTILLO
MADRID

El Tribunal Supremo ha concluido que los inspectores de Hacienda no pueden entrar a registrar un domicilio particular o una empresa “para ver qué se encuentra” bajo el único argumento de que el propietario tributa por debajo de las cifras medias de su sector.

Así lo ha dictaminado la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo anulando por defectos de motivación un auto judicial que autorizó a la Agencia Tributaria a entrar en el domicilio de una empresa que declaraba impuestos inferiores al resto de sus competidores.

El asunto, anticipado por este diario, supone un importante varapalo para la estrategia inspectora del fisco, que viene midiendo los ingresos declarados los contribuyentes a fin de elevar la inspección sobre aquellos negocios que ofrecen cifras inusualmente bajas para su entorno comercial. De un lado, advirtiéndoles directamente de las anomalías detectadas para conminarles a revisar sus declaraciones de impuestos y, de otro, utilizando estos datos como justificación para solicitar a los jueces registros domiciliarios en busca de pruebas de fraude fiscal.

La sentencia, ponencia del magistrado Francisco José Navarro Sanchís, establece los requisitos que deben reunir tanto la solicitud de entrada y registro en el domicilio o en la sede social de una empresa, formulada por la Agencia Tributaria, como el auto judicial que autorice la misma. “No cabe



Sede del Tribunal Supremo en Madrid. PABLO MONGE

Así se detecta un posible fraude

► **Las pymes.** Las pymes en las que los pagos en metálico son habituales han sido un quebradero de cabeza habitual para la Agencia Tributaria, dada la dificultad para controlar cientos de miles de pequeños comercios. Desde 2017, el fisco ha puesto en marcha un mecanismo de control estadístico que hace saltar las alarmas sobre aquellos negocios que declaran ingresos anómalos o cobros inusualmente altos para su sector en efectivo o con tarjeta.

► **Los indicios.** Cuando un establecimiento declara que cobra el 90% de sus ventas con tarjeta mientras que en el resto del ramo lo habitual es que solo se abonen así la mitad de las transacciones, el fisco puede sospechar que, en realidad, el empresario está ocultando el cobro de un 40% en metálico.

(...) la autorización de entrada con fines prospectivos, estadísticos o indefinidos, para ver qué se encuentra, para el hallazgo de datos que se ignoran, sin identificar con precisión qué concreta información se pretende obtener, por lo que no proceden las entradas para averiguar qué es lo que tiene el comprobado”, afirma.

El fallo del Supremo es en favor de un negocio de hostelería cordobés, Taberna La Montillana SL, en el que la Agencia Tributaria detectó que su rentabilidad media era de 1,95 euros por cada euro destinado a compras, frente a los 3,03 euros de media que logran negocios similares a escala nacional. “El margen comercial declarado es bastante inferior al declarado por las empresas del sector, lo que induce a pensar que el obligado tributario puede haber estado ocultando ventas efectivamente realizadas”, aseveró Hacienda.

A su vez, el cobro en efectivo declarado resultó ser 25 veces menor al de la media, lo que hizo sospechar al fisco que 24 de cada 25 euros recibidos en metálico iban a parar, sin declarar, al bolsillo de los administradores del negocio.

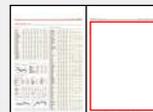
Como resultado, solicitó una orden de registro de la sede empresarial en busca de una contabilidad en B,

que el juez autorizó y los propietarios del negocio recurrieron, logrando ahora la razón.

Según la sentencia, “la corazonada o presentimiento de la Administración de que, por tributar un contribuyente por debajo de la media del sector le hace incurrir a este en una especie de presunción *iuris et de iure* de fraude fiscal, es un dato que por sí mismo no basta”, recoge el fallo.

El tribunal agrega que cuando la sospecha se basa en una ciencia “tan evanescente y laxa, de origen tan arcano, con base estadística o comparativa no contrastada ni, que se sepa, publicada, deben quedar firmemente establecidos, al menos, como punto de partida, cuáles son los criterios que llevan a la administración a aferrarse a esa rotunda conclusión, si se tiene en cuenta que la desviación de la media puede alcanzar distintos niveles de intensidad y no suponer, con tal dato aislado, presunción de fraude alguno”.

El fallo acepta, eso sí, que “el cotejo de la situación hipotética, sospechada o derivada de una información meramente fragmentaria (...) no es base suficiente para servir de título habilitante a la Administración –para pedir– y al juez –para otorgar– la entrada en el domicilio”.



El plan del Gobierno para la recuperación

Sánchez concentra 72.000 millones de la UE en 3 años para salvar su mandato

Apoyado en los fondos, promete la creación de 800.000 puestos de trabajo entre 2021 y 2023

Anticipará 27.000 millones de Bruselas en las Cuentas, con la única garantía de 4.000 millones

Carmen Obregón MADRID.

El presidente del Gobierno está dispuesto a ejecutar la mayor parte de la ayuda de la Unión Europea en los tres años que le quedan de legislatura, pese al periodo de seis años que se diseñó desde Europa. Así lo anunció ayer con motivo de la presentación oficial del Plan de Recuperación que enviará el 15 de octubre a Bruselas, y para el que tiene previsto gastar 72.000 millones entre 2021 y 2023. Con este dinero –afirmó ayer–, prevé generar “800.000 nuevos puestos de trabajo” y un impacto adicional en el PIB de más de 2,5 puntos anuales, a pesar de que Moncloa mantiene una previsión de tasa de paro del 17%.

Pedro Sánchez quiere “concentrar” la movilización de 72.000 millones de euros en subvenciones –el resto de los 140.000 que nos da la UE son préstamos– entre los años 2020-2023. Su interés se enfoca en cuatro ejes: proyectos relacionados con la transición ecológica, la transición digital, la igualdad de género

El presidente no ha anunciado ninguna medida para relanzar el tejido industrial español

Las 10 palancas del Gobierno para reactivar el tejido industrial

Los cuatro ejes del Plan de Recuperación



Las diez palancas tractoras

- Agenda urbana y rural**, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura. **Concentra en torno al 16 % de los recursos**
- Impulso de las **infraestructuras y los ecosistemas resilientes**, a través de proyectos como el Plan de Conservación y Restauración de Ecosistemas, o el Plan de Preservación de Infraestructuras Urbanas, Energéticas y de Transporte, entre otros. **Recibirá el 12 % de los fondos.**
- Transición energética** justa e inclusiva, a la que se **destinará el 9 % de los recursos**
- Diseño de una Administración para el siglo XXI**, para que el sector público actúe como motor de los cambios tecnológicos. Incluye la modernización de la justicia y **obtiene cerca del 5 % de los recursos.**
- Modernización y digitalización del ecosistema empresarial** para mejorar la competitividad industrial, a lo que se **destinarán el 17 % de los fondos.**
- Pacto por la **ciencia y la innovación y refuerzo del Sistema Nacional de Salud** para situar a la ciencia como palanca esencial en los planes de reconstrucción. **Contará con el 17 % de los recursos.**
- Educación y conocimiento**, a través del impulso de la formación continua y el desarrollo de capacidades, a lo que se **destinarán el 18 % de los fondos.**
- Nueva **economía de los cuidados y políticas de empleo**. **Alrededor del 6 % de los fondos** se dedicarán a estas políticas
- Desarrollo de la **cultura y el deporte**, industrias que el Gobierno considera indispensables para el desarrollo de una sociedad libre, con el **1,1 % de los recursos.**
- Modernización del sistema fiscal**, con un aumento de la progresividad y la redistribución de los recursos para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible.

en marcha de una comisión interministerial, que presidirá el propio Sánchez.

El presidente también avanzó la eliminación de los cuellos de botella y trabas administrativas modificando la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley General de Subvenciones y la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público.

Medidas concretas

En tres años, el Gobierno tiene previsto desplegar más de 250.000 nuevos vehículos eléctricos para alcanzar los 5 millones en 2030 y se habilitarán 100.000 puntos de recarga, al tiempo que se acelerará la transformación energética para alcanzar un sistema 100% renovable en 2050. También se rehabilitarán más de 500.000 viviendas para aumentar la eficacia energética y se reforzará la gestión integral de costas y recursos hídricos con una inversión de 2.000 millones y la restauración de 25.000 kilómetros de ríos. En digitalización se seguirá como hoja de ruta la agenda *España Digital*

Moncloa aventura un paro del 17% pese a la inyección europea, que llegará a 140.000 millones

ro y la cohesión social y territorial.

En las diez palancas para promover el tejido productivo –entre ellas agenda urbana y rural, impulso a los ecosistemas resilientes, una Administración del siglo XXI, y nueva economía de los cuidados– Sánchez no mencionó políticas de relanzamiento industrial. Tampoco explica que los 27.000 millones de los fondos que quiere sumar a los Presupuestos no están garantizados, pero los anticipará el Estado. Si recaló la necesidad de aprobar los Presupuestos de 2021 y poner en marcha “cuanto antes” el *Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia* y hacer frente a la crisis ocasionada por el Covid-19 e inyectar en el próximo ejercicio los primeros 27.000 millones de los fondos europeos.

A pesar de que los Presupuestos y los fondos *Next Generation UE* no están vinculados –pues la Comisión cuenta con unos mecanismos de control específicos, además de una Fiscalía para otorgar esas ayudas–, Sán-



Fuente: Gobierno de España.

elEconomista

chez hizo hincapié y apeló a la unidad política que le sirva a él para rubricar las próximas Cuentas Públicas; circunstancia importante que respaldaría su continuidad en el Gobierno, al menos durante tres años más, hasta el final de la legislatura.

Sumar... porque lo merece

El presidente mantiene que hay que “sumar” estas ayudas a los Presupuestos, porque “merece la pena”.

Y añade que en esa necesidad de respaldo, el Ejecutivo progresista se ha encontrado en estos meses con el apoyo de la Unión Europea, de los agentes sociales, y espera encontrar más en la cogobernanza que salga de la próxima Conferencia de Política Fiscal y Financiera que se celebrará el 26 de octubre, con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pero le queda

el sustento de la oposición, quien ayer no estuvo invitada al acto de presentación del Plan de Recuperación.

Con el apremio al calendario presupuestario, dice el presidente que eso permitirá acelerar la ejecución del plan más allá del plazo que marca la UE para los pagos.

El jefe del Ejecutivo se comprometió a garantizar la correcta ejecución de los fondos con la puesta

2025 para formar en competencias digitales al 80% de la población, promover que el 75% disponga de cobertura 5G y que toda ella tenga acceso a Internet rápido, al tiempo que se formará en teletrabajo a 150.000 funcionarios y se harán programas de digitalización para 2,5 millones de pymes. En materia educativa, precisó que el plan contempla la creación de 65.000 plazas de educación infantil de 0 a 3 años y 1.460 unidades de acompañamiento personal y familiar al alumnado vulnerable.

En políticas sociales, negociado de Pablo Iglesias, Sánchez anunció que rehabilitará y adaptará las residencias de mayores junto a un impulso de la teleasistencia, con el objetivo de que 870.000 personas dependientes puedan ser atendidas en sus domicilios. En tres años, señaló, posibilitarán que 870.000 personas dependientes vivan en su domicilio y accedan a los servicios de teleasistencia.



La mitad de empleo que al llegar a Moncloa

Sánchez prevé generar 260.000 empleos al año, cifra muy escasa para compensar el Covid

DANIEL VIAÑA / CÉSAR URRUTIA
MADRID

Los 800.000 empleos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido crear en los próximos tres años haciendo uso de los fondos europeos es una cifra que se antoja a todas luces escasa. Y para evidenciarlo, no hay más que retroceder a los años de la anterior recuperación económica en los que el ritmo llegó a superar el medio millón de puestos creados al año.

De hecho, el propio Sánchez cerró 2018 ya en Moncloa con unos 560.000 puestos generados, mientras que esos 800.000 empleos proyectados para el periodo 2021-2023 supone que cada año se crearán unos 260.000 trabajos. O dicho de otro modo: que el ritmo será la mitad que cuando él mismo llegó a la presidencia del Gobierno.

Pero es que, además, esos 800.000 puestos que promete el *Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española* a duras penas serán suficientes, si lo son, para compensar el daño que ha sufrido el mercado laboral. Si se toma como referencia el balance realizado por la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre del año, ese dato efectivamente no alcanzaría a compensar el impacto de la crisis, que en ese momento (junio) había destruido más de un millón (1.074.000) de empleos en sólo un trimestre, elevando el número de parados a 3.368.000 y situando la tasa de desempleo en el 15,33%.

Si la referencia para medir cómo de ambiciosa es la promesa de Sánchez es el momento actual, también resulta un objetivo corto. Según los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social publicados, el número de afiliados ha caído en 470.000 personas respecto a hace un año, lo que dejaría en menos de la mitad el efecto neto de la promesa del presidente. Además, hay que tener en cuenta los trabajadores que actualmente están sujetos a Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) y que actualmente superan los 700.000. Al menos 500.000 están aún incluidos en ERTE de fuerza mayor, una situación que es considerada por expertos laborales y economistas como de riesgo alto de desempleo.

Por último, si se consideran las previsiones del propio Gobierno, el periodo de creación de los 800.000

empleos prometidos por Sánchez comenzaría en 2021 con una tasa de paro del 16,9%, que en términos absolutos serían 3,7 millones de parados. Al término del trienio y con una inversión de 78.000 millones de euros, la recuperación neta de empleo sería de 100.000 trabajadores y la tasa de paro quedaría en el 13%, con grandes posibilidades de seguir liderando el desempleo en la UE.

«Sin conocer los detalles de los proyectos ni los plazos en que contaremos con los fondos me parece muy atrevido hacer afirmaciones sobre el impacto de las ayudas en el PIB y empleo», explica Marcel Jansen, Profesor Titular en la Universidad Autónoma de Madrid y colaborador de Fedea. Jansen duda de que las ayudas europeas sean suficientes para amortiguar el impacto de la crisis en el empleo.

En este contexto, desde UGT no dudaron en apuntar ayer que se tratan de cifras «escasas» teniendo en cuenta la importante inversión de 72.000 millones de euros y el daño que ha sufrido el mercado laboral durante la crisis. Desde CCOO, su máximo dirigente, Unai Sordo, señaló que «ahora toca poner el hilo en la aguja, pasar de las declaraciones presentaciones públicas mas o menos lustrosas a la concreción de las medidas».

Sánchez cerró 2018 ya en Moncloa con unos 560.000 puestos generados

Marcel Jansen duda de que las ayudas europeas sean suficientes

Y en el PP recordaron que «no es la primera vez que el PSOE promete la creación de empleos y provoca, como consecuencia de su política económica, todo lo contrario». De esta manera, en la formación *popular* se refirieron a la promesa de precisamente 800.000 puestos que el ex presidente del Gobierno, Felipe González, realizó en 1982 y que se acabó volviendo contra él ya que lo que ocurrió realmente fue una notable destrucción de empleos.



Pablo Iglesias. JAVIER BARBANCHO

DERECHOS SOCIALES

Atención en casa a mayores para crear empleo público

RAÚL PIÑA MADRID

Pablo Iglesias compareció ayer en La Moncloa sólo horas después de conocerse que el juez del caso *Dina* pide al Tribunal Supremo que investigue a Pablo Iglesias por tres delitos. Con tono muy mesurado, el vicepresidente segundo hizo una radiografía de lo que considera son las «debilidades de la estructura económica» de España: precariedad; pobreza infantil; dependencia excesiva del turismo; y baja inversión pública. Habló de la importancia de la agenda 2030, la España vaciada, la necesidad de que surjan nuevos emprendedores que lideren la economía...

Iglesias sí precisó a que desde su departamento se va a trabajar en un nuevo modelo del sistema de cuidados a mayores, discapacitados y dependientes, imitando a los países nórdicos, en especial Suecia. La apuesta se

Calcula que se crearían medio millón de puestos de trabajo

basa en incentivar la atención domiciliaria, para que estas personas no tengan que trasladarse a una residencia. Que con ayudas continuas en sus domicilios puedan permanecer

en estos. Para eso pidió «invertir». Según los cálculos de la vicepresidencia social, este modelo de atención universal a imagen del de Suecia, supondría generar 500.000 empleos que dijo, permitiría avanzar en la «políticas de igualdad de género» y reduciría la «precariedad». Asimismo, apostó por establecer la educación pública universal de 0 a 3 años, que, dijo, supondría crear 150.000 trabajos.



La ministra Teresa Ribera. MAYA BALANYA

REDUCCIÓN DE EMISIONES

26.000 millones de inversión para la transición 'verde'

VÍCTOR MARTÍNEZ MADRID

El Gobierno acelerará la transición energética como palanca para salir de la crisis. El plan de resiliencia frente a la crisis presentado ayer miércoles por Pedro Sánchez prevé adelantar dos años los objetivos de reducción de emisiones contaminantes fijados para 2025, acelerando inversiones e intensificando la movilización de recursos al calor de las ayudas concedidas al país por la Comisión Europea.

La transición ecológica será la partida que más fondos movilice dentro del plan de recuperación diseñado por el Gobierno para el periodo 2021-2023 y fue presentado ayer de manera telemática a los principales empresarios del país. Será, en concreto, un 37% de un paquete de inversión total que ha sido establecido en 72.000 millones de euros. Es

La transición ecológica será la partida que más fondos movilice

decir, más de 26.000 millones irán destinados directamente a la revolución verde.

Sánchez no concretó las actuaciones que el Gobierno prevé llevar a cabo para intensificar la

transformación del país, aunque sí dio algunas de las previsiones que maneja el Ejecutivo como son la comercialización de más de 250.000 vehículos eléctricos en los próximos tres años o la instalación de 100.000 puntos de recarga. El salto es considerable si se tiene en cuenta que en 2019 se vendieron en España algo más de 24.000 vehículos enchufables.



La vicepresidenta Nadia Calviño. EUROPA PRESS

TRANSFORMACIÓN

El tercio digital: 5G y conexiones hasta 19.600 millones

EDUARDO FERNÁNDEZ MADRID

Un tercio del plan del Gobierno, «el 33%» según lo esbozado por Pedro Sánchez a primera hora de ayer, se focalizará en la transformación digital, un capítulo detallado después por la vicepresidenta y responsable económica Nadia Calviño. La inversión digital se cifra exactamente en 19.600 millones de euros entre 2021 y 2023, lo que supone la tercera parte de los 59.000 millones procedentes del Mecanismo Europeo para la Recuperación y la Resiliencia, a los que habría que sumar los 12.000 millones del fondo de la UE React para llegar a la sonora cantidad conjunta de 72.000 millones.

La letra pequeña contempla que la principal partida digital esté dedicada a la conectividad, la ciberseguridad y al despliegue de 5G, 4.000 millones de los mencionados

Mejorar las aptitudes de los españoles es un reclamo de Bruselas

19.600, por encima por ejemplo de los 3.500 millones destinados a mejorar las competencias digitales de los españoles, una de las debilidades nacionales que más insistentemente se vienen señalando desde Bruselas.

La digitalización de las administraciones comprenderá que 150.000 empleados públicos estén «preparados para el teletrabajo», según expuso Calviño, y concentrará 2.600 millones. La digitalización de pymes y startups, otra de las tareas pendientes si España se quiere comparar con sus vecinos, tendrá por su parte 1.150 millones a su disposición.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer en la presentación en La Moncloa del plan de recuperación de la economía. / J. M. CUADRADO (EFE)

Sánchez promete 800.000 empleos en tres años con los fondos europeos

C. E. CUÉ, Madrid

El Gobierno ya tiene un proyecto para toda la legislatura, que va mucho más allá de los Presupuestos Generales del Estado. El presidente Pedro Sánchez presentó ayer el Plan de Recupera-

ción, Transformación y Resiliencia de la economía española, que remitirá a Bruselas en dos semanas, y que supone una guía para gastar de forma productiva los 140.000 millones que el fondo de recuperación europeo prevé para Es-

paña. La inversión se concentrará en los tres primeros años con el objetivo de movilizar hasta medio billón de euros con ayuda del sector privado. El Ejecutivo prevé modernizar la economía y crear 800.000 empleos hasta 2023.

Ante las dificultades de la negociación en Bruselas —que pueden retrasar la llegada de los fondos—, Sánchez anunció que España adelantará en sus Presupuestos de este año 27.000 de los 72.000 millones que tiene previsto gastar de ese fondo europeo hasta 2022. “Esto nos va a permitir adelantar los planes”, señaló, para incluirlos en los Presupuestos del Estado. El objetivo es gastar con rapidez para evitar en lo posible que los daños en la economía —con caídas del PIB superiores al 10% este año— se conviertan en permanentes.

Ante una nutrida audiencia de embajadores, empresarios y sindicalistas, pero sin representantes de la oposición, el presidente anunció que la ejecución de este plan quedará en manos de La Moncloa —no está prevista por tanto la oficina independiente que pedía el PP— pero tendrá mecanismos de cogobernanza para que participen las comunidades autónomas y los Ayuntamientos, que ejecutarán buena parte de los proyectos. Sánchez aprovechó para lanzar un mensaje de confianza en el país y pidió a los ciudada-

nos que no se entreguen a la antipolítica que cobra fuerza en estos meses, según las encuestas. Pero sus reiterados llamamientos a la unidad no terminan de cuajar. Y el plan ha sido elaborado con gran secretismo, sin que lo conocieran ninguna de las formaciones de la oposición ni comunidades autónomas o Ayuntamientos.

Y ni siquiera la puesta de largo de ese proyecto fue todo lo plácida que pretendía La Moncloa. En medio de la presentación, que era el momento estrella de la semana para el Ejecuti-

vo, irrumpió una noticia delicada para el Gobierno: la exposición razonada del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en la que solicita que se investigue al vicepresidente del Ejecutivo, Pablo Iglesias, por el caso Dina, la pieza del macrosumario del caso Villarejo que versa sobre el robo del móvil de Dina Bousseth, antigua colaboradora del líder de Unidas Podemos. Pese a que el horizonte de los Presupuestos se despeja con el dinero europeo y eso a su vez aclara el futuro de la legisla-

tura, la justicia sigue siendo protagonista en la política española.

La gestión del dinero será clave en los próximos tiempos. Ahora arrancará la negociación con autonomías y Ayuntamientos, que tiene un hito simbólico importante: el 26 de octubre habrá una conferencia de presidentes autonómicos en el Senado con la presencia de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. “Estoy convencido de que España tomará el camino de la política y no de la antipolítica. El de la buena política que propicia acuer-

Enfado de los empresarios por la organización

Los grandes empresarios invitados al acto protagonizado por el presidente Pedro Sánchez se quejaron ayer de los 45 minutos “injustificados” e “inaceptables” de espera sin causa aparente que lo justificara. En su mayoría, los asistentes consultados —con la condición de anonimato— expresaron su malestar por ese retraso —“algo que normalmente les ocurre a los políticos cuando llegan a La Moncloa”, según uno de ellos—, y por el contenido de la presentación, sin grandes novedades respecto a lo que ya se sabía del plan español.

“¿Qué pinta este acto después del que hizo en la Casa América a finales de agosto para decir prácticamente lo mismo? El Gobierno podía haber esperado a tener la letra pequeña y los instrumentos para ejecutar de forma rápida y eficiente que va a presentar dentro de 10 días y convocarnos entonces para tener más elementos de juicio”, apuntaba un financiero que, no obstante, añadió que le parece un éxito que España haya conseguido la aportación de 140.000 millones de euros. “Es una oportunidad para todos, el sector financiero puede jugar un papel realmente importante en su desarrollo”, subrayó uno de los asistentes. / M. Á. NOCEDA



dos. Debemos elevar la mirada: es el mayor reto de nuestra generación desde el restablecimiento de la democracia. Debemos hacerlo con ambición y entusiasmo. No podemos permitirnos la deserción”, aseguró el jefe de Gobierno.

El problema es conseguir esa unidad. Pero sobre todo encontrar la manera de gastar ese dinero de forma rápida y eficaz para que los proyectos sirvan como inversión productiva que tire de una economía en caída libre por la crisis de la covid-19, cuya segunda ola está azotando a España mucho más que a otros socios europeos. Para lograrlo, el presidente anunció que se cambiarán todas las leyes necesarias para agilizar los procesos y evitar burocracias.

Basado en cuatro ejes transversales —transición ecológica, cohesión social y territorial, digitalización e igualdad de género—, el plan está llamado a protagonizar una “profunda modernización” del país, según el jefe del Ejecutivo. El presidente ofreció algunos datos de lo que supondrá. Por ejemplo, se promoverá el despliegue de 250.000 vehículos eléctricos nuevos en un año para llegar a cinco millones de ellos en 2030. Además, se rehabilitarán medio millón de viviendas en 10 años para hacerlas más eficientes. Se desarrollará el 5G para dar cobertura al 75% de la población, se ofrecerá formación digital a 2,5 millones de pymes, o se crearán 65.000 plazas de educación infantil de 0 a 3 años y gratuita para reducir la brecha de género. En cuanto a la gobernanza del plan, Sánchez dejó muy claro que él dirigirá toda la operación.

La letra pequeña —los proyectos elegidos para gastar— es aún una incógnita. Pero Sánchez dejó claras las tres líneas maestras del plan. El objetivo es que esos 140.000 millones sirvan para desbloquear el presupuesto y se constituyan en una suerte de palanca que permita levantar medio billón de euros en tres años y crear 800.000 empleos. Sánchez aspira a una “nueva modernización” con protagonismo para las agendas verde y digital, y que de paso permita activar una serie de reformas que apenas vienen enunciadas en ese plan. Y dejó claro que las políticas expansivas están ahí para quedarse: al menos hasta recuperar el nivel de PIB previo a la crisis. Eso llegará, como muy pronto, en 2023.



La 'tasa Tobin' y el impuesto digital entrarán en vigor dentro de tres meses

L. DELLE FEMMINE, Madrid
Las *tasas Google y Tobin* han pasado todos sus exámenes en las Cortes. El pleno del Senado dio ayer luz verde definitiva a ambos impuestos, que empezarán a funcionar previsiblemente a inicios de 2021, ya que se contempla que entren en vigor a los tres meses de su publicación en el *Boletín Oficial del Estado* (BOE).

Estos dos tributos, que se han tramitado al margen de los Presupuestos por ser figuras de nueva creación, se han convertido en dos piezas fundamentales en el plan del Gobierno de adaptar la fiscalidad al siglo XXI. La *tasa Tobin* se aprobó por 155 votos a favor, 98 en contra y 8 abstenciones; la *tasa Google* recibió 134 síes, 101 noes y 28 abstenciones.

El impuesto digital pretende gravar con un tipo del 3% a las corporaciones con ingresos anuales de al menos 750 millones a nivel mundial y de tres millones en España, poniendo el foco en servicios de publicidad en línea, de intermediación *online* y de venta de datos. La *tasa Tobin* gravará con un 0,2% la compraventa de acciones de firmas españolas con capitalización superior a los 1.000 millones. Los sujetos pasivos serán los intermediarios financieros que ejecuten la orden de compra.

Recaudación millonaria

El Gobierno prevé recaudar unos 850 millones al año con la *tasa Tobin*. Las previsiones de ingresos por el impuesto digital, que el Ejecutivo enfrió a principios de año —antes de que estallara la pandemia— se sitúan en 968 millones, un 20% menos que lo pronosticado inicialmente. Estos cálculos, sin embargo, han sido repetidamente cuestionados.

Es sobre todo la *tasa Google* la que está en la diana. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lleva tiempo trabajando para encontrar un consenso sobre un impuesto digital a nivel global. Los detractores de esta figura consideran que, sin una tasa internacional de este tipo, las grandes tecnológicas podrán moverse a territorios con fiscalidad más baja. Además, alegan que EE UU ya ha amenazado a varios países europeos que tienen sobre la mesa un gravamen de este tipo, entre ellos España.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dice que el impuesto digital se modificará cuando se llegue a un consenso en la OCDE o la UE. Bruselas ya afirmó que si las conversaciones fracasan —EE UU, sede de las principales tecnológicas, se bajó de las negociaciones este verano—, la UE aprobará una propuesta propia.



Pr: Diaria
Tirada: 28.818
Dif: 19.343

Adif pide dispensa a Bruselas para no aflorar 16.000 millones de deuda

IMPACTO DEL COVID-19/ Los ingresos comerciales de la filial de alta velocidad ya no cubren el 50% de los gastos de explotación y amortizaciones, por lo que España se arriesga a un repunte del déficit público.

C. Morán. Madrid

Adif negocia con Bruselas una solución transitoria que le permita esquivar el límite contable que forzaría a España a reconocer el endeudamiento del grupo público y, en consecuencia, dispararía el déficit público del próximo año. El administrador de la red de alta velocidad acumula una deuda financiera de 16.000 millones que, de aflorar, dispararía el déficit público un 1,5% más, en un momento de gran debilidad de las finanzas españolas debido a los efectos del Covid.

Fuentes de la empresa reconocen el riesgo y aseguran que la compañía lleva meses incumpliendo la regla SEC95 (Sistema Europea de Cuentas) que determina que, para quedar excluida del sector de Administraciones Públicas, Adif debe cubrir, al menos, el 50% de los gastos de explotación y costes de amortización con actividades comerciales.

La empresa dependiente del Ministerio de Transportes ya cumplía con escaso margen esta condición el año pasado, ya que los ingresos comerciales representaban el 56%, frente al 44% precedente de transferencias del Estado y de la Unión Europea.

En 2020, los efectos del Covid sobre la demanda de viajeros han desplomado los ingresos comerciales de Adif y la compañía se encuentra claramente por debajo del umbral del 50%. Bruselas revisará las cuentas de Adif Alta Velocidad en marzo de 2021 y, hasta esa fecha, los responsables de la compañía tratarán de obtener una dispensa temporal de la Comisión Europea, que evite que su abultado endeudamiento empeore aún más las malas las previsiones del Gobierno.

Según el borrador del proyecto de presupuestos de 2021, el déficit público subirá al 11,3% del PIB. El efecto Adif agravaría aún más el panorama económico español. El consuelo es que, debido al coronavirus, los límites de deuda y déficit públicos que im-

En marzo de 2021 pasará el examen de Bruselas, que evaluará sus fuentes de ingresos

MOVILIDAD

Adif quiere aprovechar los cambios en la movilidad urbana e interurbana para hacer crecer sus resultados. Se ha embarcado en una red de **electrolineras** y quiere potenciar los ingresos de la fibra óptica, entre otras áreas de negocio.

El grupo tiene sobre la mesa traspasar algunos trazados de AVE sin amortizar de Adif AV a Adif

pone el Pacto de Estabilidad se encuentran suspendidos temporalmente.

En el pasado, el gestor de la red de alta velocidad ya recurrió a ingeniería contable para encajar en los límites de SEC95. En 2013 la exministra Ana Pastor aprobó la separación entre Adif y Adif AV, lo que laminó la deuda de la compañía y situó la carga más alta sobre los activos de alta velocidad, con mayor capacidad para generar ingresos comerciales.

Posteriormente, el Gobierno de Mariano Rajoy también exploró una posible fusión de Adif y Renfe. En ese momento, se valoró que la integración de balances y de resultados de las dos sociedades podría facilitar una mejor gestión financiera y evitaría el riesgo de una transformación del pasivo en nueva deuda y déficit del Estado. Pero la propuesta tuvo poco recorrido al chocar con los planes de liberalización de la UE.

Entre las medidas encima de la mesa ahora figura traspasar líneas AVE de Adif AV a Adif, con el objetivo de liberar a la filial de alta velocidad de los costes de amortización de algunos corredores que entrarán en servicio como, por ejemplo, el variante Pajares o la Y Vasca. Adif AV soporta una deuda de 16.000 millones de euros, de los que 10.000 millones corresponden a préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI),



Trenes AVE de Renfe estacionados en los andenes de la estación de Atocha de Madrid.

Más bonificaciones para estimular el tráfico de AVE

C.M. Madrid

Las restricciones a la movilidad han tenido un efecto devastador sobre la cuenta de resultados de las empresas de transporte y Adif no ha sido una excepción. El administrador de la red de AVE perdió hasta junio de este año 325 millones de euros, lo que supone multiplicar por más de dos (+142%) los números rojos de un año antes.

Los ingresos del conjunto de la red, tanto convencional como de AVE, caye-

ron un 29%, hasta situarse en 448 millones de euros. El resultado bruto de explotación (ebitda) fue negativo en 58,5 millones de euros, frente al beneficio de 134 millones de un año antes.

Los registros fueron especialmente malos en la filial de alta velocidad, Adif AV, cuyas pérdidas se elevan a 219 millones de euros, un 131% más que en 2019. Los resultados están estrechamente asociados a la caída de ingresos por cánones

que el administrador público cobra a Renfe por la circulación de sus trenes, que se desplomaron durante el estado de alarma y que siguen teniendo registros muy bajos, situados en el 30% con respecto a cualquier día de 2019.

Adif ha adoptado algunas medidas para estimular la demanda. La última consiste en bonificar los tráficos de Renfe en alta velocidad con un rebaja en los cánones del 50% hasta final de año.

otros 5.000 millones a emisiones de bonos y el resto, a financiación con otras entidades de crédito. Adif abrió un programa de deuda en la Bolsa de Dublín por hasta 8.000 millones de euros. En el último año ha realizado varias emisiones de bonos verdes para financiar la construcción de la red de AVE.

Además de la interlocución con Bruselas, Adif trabaja en diversificar actividades para ampliar su cartera de ingresos comerciales. La grandes esperanzas de la empresa estatal están depositadas en la liberalización del transporte de lar-

go recorrido a partir de diciembre de este año. Pero el Covid ha alterado sus previsiones y el retraso de la entrada en servicio de los nuevos competidores de Renfe. Oúngo, la marca empleada por SNCF en España, comenzará a operar en marzo de 2021, mientras que Ilsa, la empresa fundada por Air Nostrum y participada por Trenitalia, tiene previsto arrancar en 2022.

La previsión de Adif es que la competencia incrementase en 2.000 millones de euros sus ingresos en los próximos diez años, pero la estimación

de evolución de demanda apunta a que el mercado no volverá a recuperar las cifras de 2019, al menos, hasta 2023.

El gestor público también quiere incrementar los ingresos procedentes de las estaciones, convirtiendo los nuevos *hub* ferroviarios como Atocha o la futura estación de Chamartín en grandes centros comerciales.

Otra vía de ingresos en marcha es la futura red de electrolineras o la optimización de la red de fibra óptica alquilada a REE.



Sánchez movilizará 72.000 millones en tres años y promete crear 800.000 empleos

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA/ El Gobierno, que prevé un alza adicional del PIB del 2,5% anual, consumirá el grueso de las ayudas directas en lo que resta de legislatura y concentrará el 70% de los fondos en inversión verde y digitalización.

M. Serraller/J. Díaz. Madrid

Con el mediático pianista James Rhodes como telonero, interpretando el *Himno de la Alegría*, y flanqueado por banderas de España y la UE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escenificó ayer en la Moncloa a bombo, platillo y parafernalia tecnológica las líneas genéricas de su *Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía*, que pivota esencialmente en torno a las ayudas europeas. Lo hizo mediante un formato inédito, y no solo por el desacostumbrado preámbulo musical, sino por el uso de pantallas de plasma para hacerlo acompañado, aunque virtualmente, por numerosos representantes de la sociedad civil, los agentes sociales y altos directivos empresariales. Entre ellos, Ana Botín, presidenta de Santander; José María Álvarez-Pallete (Telefónica); Pablo Isla (Inditex); Ignacio Galán (Ibedrola); Carlos Torres (BBVA); Florentino Pérez (ACS); Isidro Fainé (Fundación La Caixa); José Manuel Entrecanales (Acciona); Rafael del Pino (Ferrovial); Antonio Huertas (Mapfre); José Bogas, CEO de Endesa; Antonio Garamendi, presidente de CEOE; José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España; o Gonzalo Sánchez, presidente de PwC.

Todos ellos conectados pa-

España destruirá este año 1,7 millones de empleos, más del doble de los se prevé generar en un trienio

ra conocer de primera mano el plan de Sánchez, que pasa esencialmente por movilizar 72.000 millones en los próximos tres años (2021-2023) para generar un crecimiento adicional del PIB de 2,5 puntos anuales y crear 800.000 puestos de trabajo. De esa cifra, el grueso, 59.000 millones, corresponderá a las subvenciones a fondo perdido de Bruselas y los 12.000 millones restantes al fondo ReactEU (ayudas adicionales de las que saldrá la prefinanciación de las ayudas). Unas cifras a las que el presidente añadió otros 79.000 millones provenientes de los fondos estructurales y de la Política Agraria Común (PAC), que España deberá recibir entre 2021 y 2027.

El Gobierno concentra así prácticamente todas las transferencias directas en el próximo trienio, que es lo que le resta de legislatura del Ejecutivo de coalición, a pesar de que tiene seis años para absorber todos los recursos. Los 68.000 millones de restantes, hasta los 140.000 millones a los que podría acceder España, serían vía créditos que ha-



Pedro Sánchez, ayer en la Moncloa durante la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

bría que devolver.

Amén de su generoso cálculo de lo que la ayuda europea aportará anualmente al PIB, 2,5 puntos más al año (el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, avisó el martes de que si no se hace un uso eficiente de los fondos el efecto podría reducirse a décimas), el resultado en términos de creación de empleo es del todo insuficiente para recuperar los 1,7 millo-

nes de puestos de trabajo que se destruirán este año según los propios cálculos del Ejecutivo. Es decir, en el próximo trienio se generará menos de la mitad de empleos que los destruidos de un plumazo por el Covid en menos de un año.

El 70% de los fondos que el Ejecutivo invertirá entre 2021 y 2023 se concentrará en dos áreas que el Gobierno, en un claro guiño a la UE, considera prioritarias: la inversión ver-

de para espolear la transición ecológica, que consumirá el 37% del total, y la digitalización, que absorberá el 33%. Esto es, entre ambas acaparán 50.400 millones y representan dos de los cuatro grandes ejes del plan de recuperación. Los otros dos son la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Esos pilares se despliegan a su vez en torno a una decena de "políticas tractoras" (ver informa-

ción adjunta), cuya guinda es una reforma fiscal sobre la que Sánchez insistió en su propósito de hacer converger la presión fiscal en España con el promedio de la UE, 7 puntos más alta. Para ello, se crearán impuestos verdes y se creará un comité de expertos para diseñar la reforma.

En el marco de su objetivo de concentrar la movilización de recursos en los primeros tres años para "acelerar la

EL DESTINO DE LA INVERSIÓN

18%

Educación y conocimiento

La política tractora entre las diez seleccionadas para incidir directamente en aquellos sectores productivos con mayor capacidad de transformación del tejido económico y social que va a recibir más inversión es la educación y el conocimiento, la formación continua y el desarrollo de capacidades. Esta política concentrará el 18% de los recursos ya que si hay un elemento capital para que el Plan tenga el impacto deseado, ese es la inversión en capital humano, subraya el Gobierno.

17%

Pacto por el Sistema Nacional de Salud

Esta crisis sanitaria ha puesto a la ciencia en un lugar preminente como palanca esencial en los planes de reconstrucción. Por ello, la política tractora que acapara más porcentaje de inversión tras la educación y el conocimiento es el Pacto por la ciencia y la innovación y el refuerzo del Sistema Nacional de Salud, que contará con el 17% de recursos. "Debemos fortalecer nuestras capacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación y fomentar la inversión pública y privada en I+D+", instó Sánchez.

17%

Modernización del tejido productivo

La modernización y digitalización del ecosistema de las empresas, es, junto con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, la segunda política tractora a la que se va a destinar más porcentaje de inversión, el 17%, ante la necesidad urgente de apoyar el tejido empresarial y garantizar la competitividad industrial. Se dirige a las pymes, a la industria, al sector turístico y "un impulso decidido a la estrategia España Nación Emprendedora", planteó Sánchez.

16%

Agenda urbana y rural, despoblación

En la agenda urbana y rural, la lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura se concentra el 16% de los recursos, y entre sus objetivos figuran la mejora de la habitabilidad de entornos urbanos y dar respuesta a las necesidades del entorno rural, manteniendo la población y fomentando el empleo. Pretende mejorar la habitabilidad urbana mediante un plan de choque de movilidad sostenible y un plan integral de rehabilitación de vivienda y dar respuesta a las necesidades del entorno rural.



Al menos una decena de foros de alto nivel

En política son importantes las formas, pero sobre todo el fondo. Pedro Sánchez y sus asesores parecen haber optado, sin embargo, por invertir la ecuación y anteponer, o al menos superponer, la puesta en escena y la teatralización sobre el mensaje, con el consiguiente riesgo de verlo diluirlo. Una estrategia que busca amplificar las políticas, los anuncios, y que se sirve de la recurrente convocatoria de representantes de la sociedad civil, agentes sociales y empresarios como gran caja de resonancia. En este contexto, Sánchez anunció ayer la creación de una retahíla de foros de alto nivel con el argumento de facilitar “una interlocución continua, intensa, muy próxima con las empresas, con los trabajadores” y con el resto de actores que participan en los proyectos... pero también en busca de su colaboración porque “necesitamos arrastrar inversión privada”. Así, el presidente anunció un foro sobre ciencia e innovación, otro sobre digitalización (ya en marcha), un tercero sobre energía, otro sobre agua... sobre movilidad, sobre industria, sobre turismo, sobre el reto demográfico, cultura o deporte. ¿Quién da más?

reactivación de la economía” y la modernización de España, el jefe del Ejecutivo anunció que el Gobierno adelantará en los Presupuestos 27.000 millones del Plan de Recuperación. Aunque la Comisión Europea dejó claro días atrás que las ayudas comunitarias no tienen por qué estar vinculadas a las cuentas públicas (lo que demanda son reformas estructurales, de las que Sánchez dio ayer muy pocas pistas), el Ejecutivo ha optado por fusionar ambas, lo que eleva la presión sobre las fuerzas de la oposición para que respalden unos Presupuestos que, según el presidente, “España necesita perentoriamente” y que “son los presupuestos que demanda un país que debe reponerse de un gran golpe, pero que también tiene que ganar su futuro”. Y al tiempo que supeditaba presupuestos y ayudas, el jefe del Ejecutivo hacía un nuevo llamamiento al consenso porque nunca “nuestro país

ha necesitado tanto la unidad, la cooperación y la lealtad institucional del conjunto de todas las fuerzas políticas parlamentarias”.

Sánchez confirmó ayer lo que se apresuró a anunciar el mismo día (21 de julio) en que la UE selló su histórico acuerdo para resurgir de las cenizas del Covid: que él personalmente pilotará la asignación de los fondos a través de una comisión interministerial de la que formarán parte todos los ministros involucrados en el plan.

Además, se creará una unidad de seguimiento “para la correcta ejecución” de los recursos y se reactivará la Conferencia Sector de Fondos Europeos con las CCAA para hacerlas partícipes del proceso en aras de la proclamada cogeranza que Sánchez defiende con especial ahínco desde el inicio del nuevo curso.

Editorial / Página 2

Calviño aplaza a finales de 2022 el nivel de PIB pre-Covid

FONDO DE LA UE/ Espera “recuperar el nivel de PIB previo a la llegada de la pandemia a finales de 2022 y se vuelva a la senda de crecimiento pre-Covid a finales de 2023”.

M. S. Madrid

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, defendió ayer que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española es “absolutamente esencial” para que España “recupere el nivel de PIB previo a la llegada de la pandemia a finales de 2022 y se vuelva a la senda de crecimiento pre-Covid a finales de 2023”.

Calviño desveló sus previsiones en la tarde de ayer, durante un encuentro en La Moncloa para detallar el plan presentado por la mañana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con los también vicepresidentes Carmen Calvo, Pablo Iglesias y Teresa Rivera.

Según Calviño, el plan supone “una oportunidad extraordinaria para impulsar la recuperación económica y abordar un proceso de modernización de nuestra estructura productiva”, con intención no sólo de hacer frente a los retos derivados de la pandemia, “sino también para lograr un crecimiento más sostenible a medio plazo desde el punto de vista económico y financiero, medioambiental y social”.

El programa de inversiones y reformas, que según detalló tiene un abanico “muy



Nadia Calviño, vicepresidenta para Asuntos Económicos, ayer.

denso” de medidas y actuaciones, busca movilizar la inversión privada y la innovación, además de lanzar un programa que “nos permita crecer entre 2 y 3 puntos porcentuales en los próximos tres años y a medio plazo, lograr que la economía española tenga un crecimiento potencial superior al 2”. En la presentación del nuevo cuadro macro el martes, Calviño habló de dos puntos los que

podría incrementar el plan, cifra que Sánchez elevó ayer a 2,5 puntos.

En las antípodas del discurso de Calviño, centrado en las políticas que corresponde a su Ministerio emprender y en las previsiones económicas de su competencia, el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, analizó las carencias de la economía espa-

Iglesias advierte de la debilidad de que la economía dependa del turismo internacional

ñola, además de las sociales e ideológicas. Iglesias catalogó como una “debilidad” de la economía española que el modelo productivo sea dependiente del turismo internacional y abogó por diversificar la economía.

Iglesias admitió que el turismo internacional “siempre va a ser importante para un país como España”, pero advirtió de que el país debe diversificar para “no depender de un sector económico que, cuando viene una crisis como la del Covid-19, revela las debilidades estructurales”.

“Los fondos europeos tienen que significar también una renovación de las élites empresariales”, subrayó, y apostó por que “nuevos emprendedores” asuman el liderazgo empresarial, con “sectores más dinámicos capaces de generar mayor valor añadido”, en alusión al turismo y en lugar “del ladrillo”. Iglesias, que añadió que “la corrupción tiene una base económica”, llamó a generar alternativas económicas más allá de Madrid, “Madrid no es España”, en la España vaciada y en otras autonomías.

12%

Infraestructuras y ecosistemas

La política que recibirá el 12% de los recursos se centra en impulsar las Infraestructuras y los ecosistemas resilientes, a través del Plan de Conservación y Restauración de Ecosistemas, o el Plan de Preservación de Infraestructuras Urbanas, Energéticas y de Transporte. “Estamos hablando de preservar nuestra biodiversidad. Somos la Costa Rica de Europa”, aseguró el presidente.

9%

Transición energética justa e inclusiva

Para aprovechar el potencial para posicionarse estratégicamente como líderes de la renovación energética se establece la tercera política tractora: la transición energética justa e inclusiva, a la que se destinará el 9% de los recursos. “Debemos aprovechar el enorme potencial de nuestro país para posicionarnos estratégicamente como líderes de la renovación energética a escala global”, dijo.

6%

Nueva economía de ciudades y empleo

La política tractora de la Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo recibirá el 6% de los recursos. En este apartado se incluyen, entre otros, planes de choque para la economía de los cuidados de larga duración a personas mayores y dependientes, el refuerzo del Sistema Nacional de Dependencia o la modernización de las políticas activas de empleo.

5%

Administración para el siglo XXI

La política tractora que quiere promover una Administración para el siglo XXI acapará el 5% de los recursos con el fin de que la Administración actúe como motor de los cambios tecnológicos. Entre las reformas que incluye esta línea de trabajo, figura la de la Modernización del Sistema de Justicia. “Estamos en un Estado compuesto para el siglo XXI”, resumió Sánchez.

1,1%

Desarrollo de la cultura y deporte

El desarrollo de la cultura y el deporte, dos industrias indispensables para el desarrollo de una sociedad libre y abierta, será la política que menos recursos recibirá, el 1,1%. Sánchez destacó la vulnerabilidad de la industria cultural en la pandemia, y que también es generadora de riqueza, industria y empleo. El deporte representa, a su juicio, una de las ventajas competitivas del país.



El Gobierno reducirá los controles para agilizar el reparto de los fondos

CAMBIO EN LA LEY/ El Ejecutivo flexibilizará la Ley de Contratos para dar los 72.000 millones en tres años. Temor en las empresas a que el sistema encubra un mecanismo arbitrario de reparto de ayudas.

I.G. Madrid
Pedro Sánchez anunció ayer durante la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía, que el Gobierno cambiará leyes para agilizar procesos y evitar que la burocracia obstaculice la recuperación.

El anuncio del presidente no despierta el mismo entusiasmo en otros sectores, que interpretan las palabras de Sánchez como una maniobra para reducir los controles y los requisitos necesarios para repartir, desde La Moncloa (finalmente no se creará ninguna agencia independiente) y en solo tres años los 72.000 millones de euros que serán ayudas directas.

El temor en los diferentes sectores es que lo que se presenta como un mecanismo para acortar los plazos, o en

palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo, “la modernización de la Administración”, sea en realidad un eufemismo para encubrir la creación de un sistema arbitrario en el reparto de los fondos, que quiebre los principios de transparencia, concurrencia, publicidad y control. Que la modificación que anuncia el Gobierno suponga, en definitiva, una relajación de los controles que contiene la ley y que propicie un peligroso caldo de cultivo para la corrupción.

Los propios Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), ante el anuncio del Gobierno, advirtieron ayer de la necesidad de garantizar el control del gasto público, y propusieron reforzar instituciones como la Intervención General del Estado y suspender la externalización de auditorías.



Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, ayer.

La vicepresidenta Carmen Calvo quiso ayer disipar estos temores asegurando que las modificaciones se realizarían “sin faltar al rigor del Estado

de derecho”. Sin embargo, la vicepresidenta no entró ayer en el detalle de las reformas, que se tramitarían en el Congreso “para que los grupos

políticos puedan hacer aportaciones”. Calvo advirtió que cualquier modificación deberá ser acorde con la normativa comunitaria, un aspecto que

Cualquier cambio sustancial exigiría una reforma de la Directiva que llevaría muchos meses

podría retrasar la propia tramitación del real decreto que, según la vicepresidenta, debería estar listo el próximo enero.

El anuncio del Gobierno, que contemplaría la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público y de su régimen jurídico y de las leyes Presupuestaria y de Subvenciones, choca sin embargo con los plazos que impone Europa, ya que cualquier cambio sustancial en el espíritu de dicha legislación exigiría una reforma de la Directiva que, aunque se tramite de forma urgente, llevaría muchísimo tiempo.

Otras fuentes señalan que esa reforma que anuncia el Gobierno ni siquiera es necesaria porque la propia normativa vigente ya contempla trámites de urgencia, que se pueden aplicar sin necesidad de debilitar los controles que contiene la ley. En este contexto la “modernización de la Administración anunciada por el Gobierno no estará exenta de polémica.



La UE lanzará bonos sociales para financiar el fondo de desempleo

Expansión.Madrid

La Comisión Europea ha puesto en marcha la maquinaria para captar fondos con los que financiar sus ambiciosos programas para combatir los estragos económicos del coronavirus. Así, el ejecutivo que preside Ursula von der Leyen anunció ayer que emitirá bonos sociales para financiar los 100.000 millones de euros del fondo SURE, un instrumento de préstamos con el que Bruselas quiere aliviar la carga que soportan los Estados miembros por el pago de prestaciones para proteger el empleo, como los ERTE en España o mecanismos similares en otros países. La primera de esas emisiones se realizará durante la segunda quincena de este mes, según anunció ayer el ejecutivo comunitario. Será a partir de esa fecha cuando SURE comience a otorgar los primeros tramos de ayudas. En el caso concreto de España, recibirá en conjunto un préstamo de 21.325 millones de euros, una cantidad inferior a los 22.000 millones que el Gobierno español había destinado hasta el pasado 30 de septiembre a financiar los ERTE.

Hasta la fecha, Bruselas ha autorizado los créditos de dieciséis Estados miembros, que suman 87.400 millones. Una cifra a la que en breve se sumarán los 504 millones propuestos para Hungría, pendientes aún de luz verde.

En el contexto de esta iniciativa, la Comisión Europea ha adoptado un Marco de Bonos Sociales con el objetivo de ofrecer las garantías necesarias a los inversores que vayan a comprar esos títulos de que los fondos movilizados se utilizarán con una meta "verdaderamente social", que no es otra que mitigar los efectos sociales del coronavirus y sus nocivas consecuencias sobre el mercado de trabajo de la UE, en el mercado laboral europeo. Este Marco obligará a los países miembros a informar sobre el destino de los fondos que han obtenido a través del SURE y sobre el impacto social de las partidas que han financiado. Bruselas asegura que este marco se ha creado "respetando plenamente" los principios de los bonos sociales de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales y ha sido evaluado de forma independiente por Sustainalytics.



NOTICIAS DESTACADAS MEDIOS DIGITALES

Jueves, 8 de octubre de 2020

El Gobierno fía al sector público la mayor parte de creación de empleo con fondos UE

A pesar de que se impulsará la colaboración público-privada, la creación de empleo se concentrará en servicios sociales, como dependencia, cuidados, educación o sanidad

08/10/2020 [Iván Gil](#)

El Gobierno prevé crear alrededor de [800.000 puestos de trabajo en los próximos tres años](#). Es una de las principales misiones marcadas en el plan de reformas que se ejecutarán con los fondos provenientes de la UE. Un total de 140.000 millones de euros, de los cuales se distribuirán 72.000 en el periodo 2021-2023, según anunció este miércoles el presidente del Gobierno, [Pedro Sánchez](#). A pesar de que se impulsará la colaboración público-privada, la mayor parte de la generación de empleo se fía al [sector público](#), principalmente en lo referente a servicios sociales, como **dependencia, cuidados, educación o sanidad**.

"Vamos a fortalecer el estado de bienestar, es una de las grandes lecciones que tenemos que sacar de esta crisis, necesitamos una salud pública, una sanidad pública, una educación pública, un sistema nacional de dependencia, y unos servicios de proximidad y atención a las personas mayores y dependientes muchísimo más potentes y fuertes de los que tenemos en nuestro país en el día de hoy", aseguró el presidente durante la presentación. El vicepresidente segundo, [Pablo Iglesias](#), puso algunas cifras: la universalización de las escuelas de cero a tres años **supondría la creación de 150.000 puestos de trabajo**.

El plan contempla la creación de más de **65.000 plazas y 1.460 unidades de acompañamiento** y orientación personal y familiar para atención del alumnado. En lo que se refiere a dependencia, el objetivo es posibilitar que en tres años **870.000 personas accedan a los servicios de teleasistencia**. El 6% de los fondos se destinará a las políticas tractoras sobre economía de los cuidados y políticas de empleo.

La propuesta que se enviará a Bruselas recoge que, "más allá del refuerzo de los tres pilares existentes del estado de bienestar (educación, sanidad y servicios sociales), es preciso desarrollar el **cuarto pilar: el de la economía de los cuidados**". Concretamente, se detiene en la apuesta por "fortalecer la infraestructura del sistema de dependencia, los cuidados de larga duración, así como la **atención domiciliaria**".

En esta línea, se subraya que es preciso abordar en profundidad "todas las cuestiones relacionadas con la financiación y la gestión del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, así como una mejora del funcionamiento global del sistema para impulsar los cambios orientados a la **universalización de los servicios públicos de atención a la dependencia** y la implantación de un sistema centrado en la atención a la persona". Asimismo, el Plan España País Accesible promoverá la accesibilidad universal en todos los ámbitos, y el Plan España te Protege extenderá los servicios de atención integral a todas las potenciales víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres.

Otra de las palancas para la creación de empleo será la lucha contra la crisis ambiental y la transición ecológica. La vicepresidenta del ramo, [Teresa Ribera](#), ha puesto el foco en diversas inversiones que serían generadoras de empleo, como la restauración ecológica, actuando en prevención de incendios, parques naturales, restauración de humedales o de ríos (hasta 3.000 kilómetros), así como el impulso a la rehabilitación de espacios urbanos, rehabilitaciones para mejorar la eficiencia energética o planes de movilidad sostenible reforzando y transformando la flota de transporte público o los carriles bici. Las **infraestructuras y ecosistemas resilientes movilizarán el 12%** de los fondos, y la transición energética, el 9%.

El denominado pacto por la ciencia y el "refuerzo de las capacidades del **Sistema Nacional de Salud**" **absorberán un 17% de los recursos** provenientes de Bruselas, mientras que a educación se destinará el 18%. Se incluyen en este campo las inversiones en el Plan Nacional de Capacidades Digitales del conjunto de la población, el Plan Estratégico de Impulso a la Formación Profesional o la modernización y la digitalización del sistema educativo. La FP, más concretamente, se impulsará mediante la modernización de las titulaciones, el desarrollo de sistemas de cualificación en el trabajo y el impulso de la FP dual.

Los distintos ministerios serán los encargados de distribuir los fondos europeos para los proyectos. Para ello, se creará una **comisión interministerial**, que presidirá Sánchez, además de una unidad de seguimiento en Moncloa, también dependiente de Presidencia del Gobierno en coordinación con las comunidades autónomas. En la próxima Conferencia de Presidentes, que se celebrará el 26 de octubre con la presencia de Ursula von der Leyen, se comenzará a abordar la gestión de los fondos en el marco de la cogobernanza.

Se potenciará asimismo la colaboración público-privada y se desarrollarán diversos fondos de alto nivel relacionados con la ciencia e innovación, digitalización, energía, agua, movilidad, industria, turismo, reto demográfico, cultura o deporte. La rendición de cuentas se realizará en el Congreso ante la Comisión Mixta de la UE, según la propuesta que se trasladará al órgano rector de la Cámara. Para [asegurar la ejecución íntegra de los fondos](#) europeos, el Ejecutivo prepara un real decreto con el objetivo de realizar "modificaciones normativas" que agilicen tanto la contratación pública como la ejecución. Será, en palabras de Sánchez, "una reforma histórica" que eliminará "todos los cuellos de botella", centrándose en la ley de contratación pública de 2017 y en la ley general de subvenciones. Se trata de acortar los plazos y procesos en la contratación pública, además de otros cuellos de botella relacionados con la capacidad en recursos humanos, como se ha demostrado con la tramitación de solicitudes del ingreso mínimo vital.

https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/sanchez-hosteleria-turismo_0_1398761231.html

Sánchez se olvida de la hostelería y el turismo en su plan de reconstrucción de España

En la presentación del plan que enviará a Bruselas, el presidente del Gobierno no menciona a la hostelería y deja en un segundo plano al turismo, pese a representar el 13% del PIB español

08/10/2020 [Nerea San Esteban](#) [Beatriz Triguero](#)

Respaldado por todos los ministros del Ejecutivo y rodeado de los primeros espaldas del Ibex y de las organizaciones empresariales, el presidente del Gobierno, **Pedro Sánchez**, anunciaba este miércoles el [Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española](#), que enviará en los próximos días a Bruselas para marcar las líneas de gasto de los 140.000 millones de euros que recibirá del fondo de recuperación europeo hasta 2026.

Un anuncio en el que Sánchez ha hablado de **creación de puestos de trabajo (800.000 en tres años), transformación ecológica y transformación digital**, pero en el que no ha mencionado a uno de los sectores más afectados por la crisis del [coronavirus](#) como es la hostelería. También ha mantenido en un segundo plano al turismo, pese a representar el 13% del PIB español. Invitadas también a la conferencia, las patronales de estos sectores se mostraban incrédulas.

"Es lamentable. ¿No va a haber ningún fondo? ¿Ayudas? ¿Proyectos? No acabo de entender que no sea capaz de nombrarnos, no entiendo nada", comenta el presidente de Hostelería de España, **José Luis Yzuel**, en conversación con este periódico. En esta línea, los hosteleros venían demandado desde hace semanas **la inclusión del sector como uno de los receptores de las ayudas de los fondos europeos**, algo que por el momento el Ejecutivo no ha mencionado.

"Lo que sentimos es decepción absoluta, sorpresa e indignación. ¿Haces un *speech* sobre al recuperación de la economía de España y no nombras a la hostelería?", se pregunta Yzuel. Los representantes de los bares y restaurantes españoles solicitan que, dentro del plan presentado por Sánchez, "se vertebrase un **plan estratégico de rescate del sector**", relacionado además con el estímulo de la demanda y ayudas de fomento del empleo.

"Es fundamental saber de qué manera se van a destinar los fondos europeos. Somos conscientes de que **es el único lugar en el que va a haber recursos para reestructurar sectores** y relanzar la economía", insisten desde la patronal. Según los cálculos de Hostelería de España, la crisis del coronavirus ha traído consigo el cierre de 50.000 locales, que podrían llegar hasta 90.000, **el 30% del total** en España, si no se implementan más ayudas al sector.

Lejos de los reclamos del turismo

De momento, en el turismo hay silencio a la espera de conocer más detalles, pero los planes que Sánchez ha avanzado este miércoles están muy lejos de los reclamos del sector. El Gobierno ha encuadrado al turismo en la quinta política tractora del Plan de Recuperación, que acaparará el **17% de los 72.000 millones iniciales**, es decir, alrededor de 12.240 millones.

Esta cuantía se destinará a "la **modernización y digitalización de nuestro tejido productivo**, de nuestras pequeñas y medianas empresas, **de nuestra industria, de nuestro sector turístico** y un impulso decidido a la estrategia España Nación Emprendedora", tal y como ha avanzado el presidente del Gobierno en rueda de prensa.

En el discurso, Sánchez ha puesto por delante a otros **sectores "estratégicos"** como la agroindustria, la biotecnología, la construcción, la automoción, la educación y la ciencia. Un lista que ha cerrado con el turismo. La patronal Exceltur, que prevé un **descalabro económico de 98.753 millones este año**, había reclamado al Ejecutivo **al menos el 25% de los 140.000 millones que Bruselas concederá a España.**

"Somos el primer país en competitividad turística del mundo y el segundo destino más popular del planeta y estoy convencido de que una vez pase esta pandemia, porque pasará, el sector turístico tendrá un futuro aún más brillante del que tenía antes de la pandemia", ha asegurado Sánchez.

<https://www.lainformacion.com/espana/sanchez-presupuestos-reformas-ayudas-europa-pp-casado/2817233/>

Moncloa no contempla un rechazo

Sánchez vincula los fondos de la UE a la aprobación de los PGE para apretar al PP

Hacienda incluirá los 27.000 millones correspondientes a transferencias para 2021 en las partidas de las próximas cuentas públicas y fía su ejecución a que una mayoría del Congreso valide el proyecto de ley.

[Fernando H. Valls](#) **[José Antonio Navas](#)** 08.10.2020

El Gobierno ha sentado en apenas 24 horas las bases de [su proyecto económico](#) para los próximos años. La presentación del **Plan de reformas** y la aprobación del mayor techo de gasto han sido los teloneros de la **presentación del borrador de Presupuestos**. El acto, en el que estarán Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, está previsto para la próxima semana y en él se reflejará el espíritu de la coalición sumado a [los más de 27.000 millones que se incluirán en el proyecto de ley de cuentas públicas](#) para gastar solo el próximo año. Esta maniobra no es casual. Todo lo contrario. **Busca poner al PP en un brete en la negociación** y votación presupuestaria.

El Ministerio de Hacienda incluirá, ministerio por ministerio, esos 27.000 millones en los Presupuestos de 2021 dando opción que cada departamento incorpore en su centro de coste los proyectos finalistas para su gestión política. En concreto, la fórmula escogida por el Gobierno pasa por **incrementar y alumbrar partidas económicas dentro el proyecto de ley de cuentas públicas**. La titular del departamento, María Jesús Montero, ya ha dado orden a todos los ministros de ir mejorando y ampliando aquellos aspectos relacionados con los [diez ejes o "políticas palanca"](#) bajo los que se articularán las ayudas europeas.

En definitiva, el Gobierno 'salpimenta' los proyectos finalistas de la UE por cada uno de los ministerios a fin de que sea mucho más complicado extraer esas partidas de las cuentas públicas. En consecuencia, **los fondos europeos quedan vinculados con los PGE** en un mismo esquema de actuación.

Esta maniobra implica que los Presupuestos que lleve el Gobierno al Congreso incluirán un incremento del gasto histórico y harán que la oposición tenga que implicarse: **rechazar las cuentas públicas y, por tanto, bloquear el reparto de las ayudas comunitarias** o, por el contrario, favorecer su inclusión y que esos 27.000 millones sirvan para modernizar al tejido productivo. Sánchez y el PSOE ya tienen el argumentario apuntalado para 'apretar' al PP.

Pero la oposición se mantiene, en este primer tira y afloja, firme. Las opciones que se manejan en los partidos ajenos al Gobierno apuntan a no sentirse concernidos por esta estrategia que califica de "**chantaje**". Propondrán, en este sentido, **que el Ejecutivo apruebe un real decreto para el reparto efectivo de estos fondos comunitarios,**

separando así las ayudas de los Presupuestos. Se trata, por tanto, de evitar que las cuentas públicas se conviertan en 'cajón de sastre' donde cabe todo y de **evitar que Sánchez convierta las ayudas de la UE en 'esclavos' de unos Presupuestos** cuyas líneas generales aún ni siquiera se conocen.

En el área económica del Gobierno aseguran que **no se plantean la opción de que no haya Presupuestos**. No es un escenario que contemplen, al menos en este momento donde hay varias vías abiertas, tanto con los partidos de la investidura como con Ciudadanos. Pero sí que han valorado otras opciones que pasarían por crear nuevas partidas presupuestarias, utilizando los citados reales decretos, que, reconocen, complicarían la manera de vehicular el dinero comunitario.

El Gobierno prepara la 'Operación PP'

El Gobierno ya ha comenzado a lanzar mensajes al PP para que se sume a la aprobación de estos Presupuestos que, según los datos sobre la mesa, serán los más expansivos de la historia. La operación de cortejo lleva varios días en marcha. Ayer Sánchez dijo que **"nunca desde la Transición este país ha necesitado la unidad de todas las fuerzas parlamentarias"**. Yo no reclamo un apoyo ciego a nuestras políticas, pero sí una colaboración mínima en beneficio de nuestro país". Y lo dijo ante la plana mayor del Ibex.

El fin de semana, en el Foro La Toja, el presidente del Gobierno fue más preciso. Este es su argumentario: "Los Presupuestos Generales del Estado para 2021 están llamados a determinar el rumbo económico y social de todos, de todo el país para los próximos años. Son extraordinarios porque extraordinaria es la situación y por tanto, **necesitaríamos de acuerdos extraordinarios**". Y añadió: "Estos presupuestos van a ser el vehículo que permita canalizar las ayudas procedentes de la Unión Europea. Y entiéndanme bien, no quiero decir con esto, que **si no hay presupuestos no vamos a poder vehicular esos fondos**. Pero lo que sí es evidente es que no vamos a poder vehicularlos de la misma manera, ni absorberlos de la misma manera que con unos presupuestos que estén acordes a la realidad y a la coyuntura económica y social de nuestro país".

Sánchez quiere unos PGE con un amplio acuerdo y va a poner el foco en Pablo Casado: **"Ni puede ni debe haber líneas rojas**, al menos este es el planteamiento que tiene el gobierno de España. Serán unos presupuestos progresistas, porque la coalición es progresista, pero tienen que ser unos presupuestos progresistas de país. A la tarea de aprobarlos vamos a convocar a todas las formaciones políticas de la Cámara, **incluso también al principal partido de la oposición**. No nos vamos a cansar de repetirlo, aunque se autoexcluyan con otras formaciones políticas".